

PICA Y PALA

Conflictos del modelo extractivista en los sectores
de la minería y los agrocombustibles

Jorge Andrés Pinzón

Marisabel García

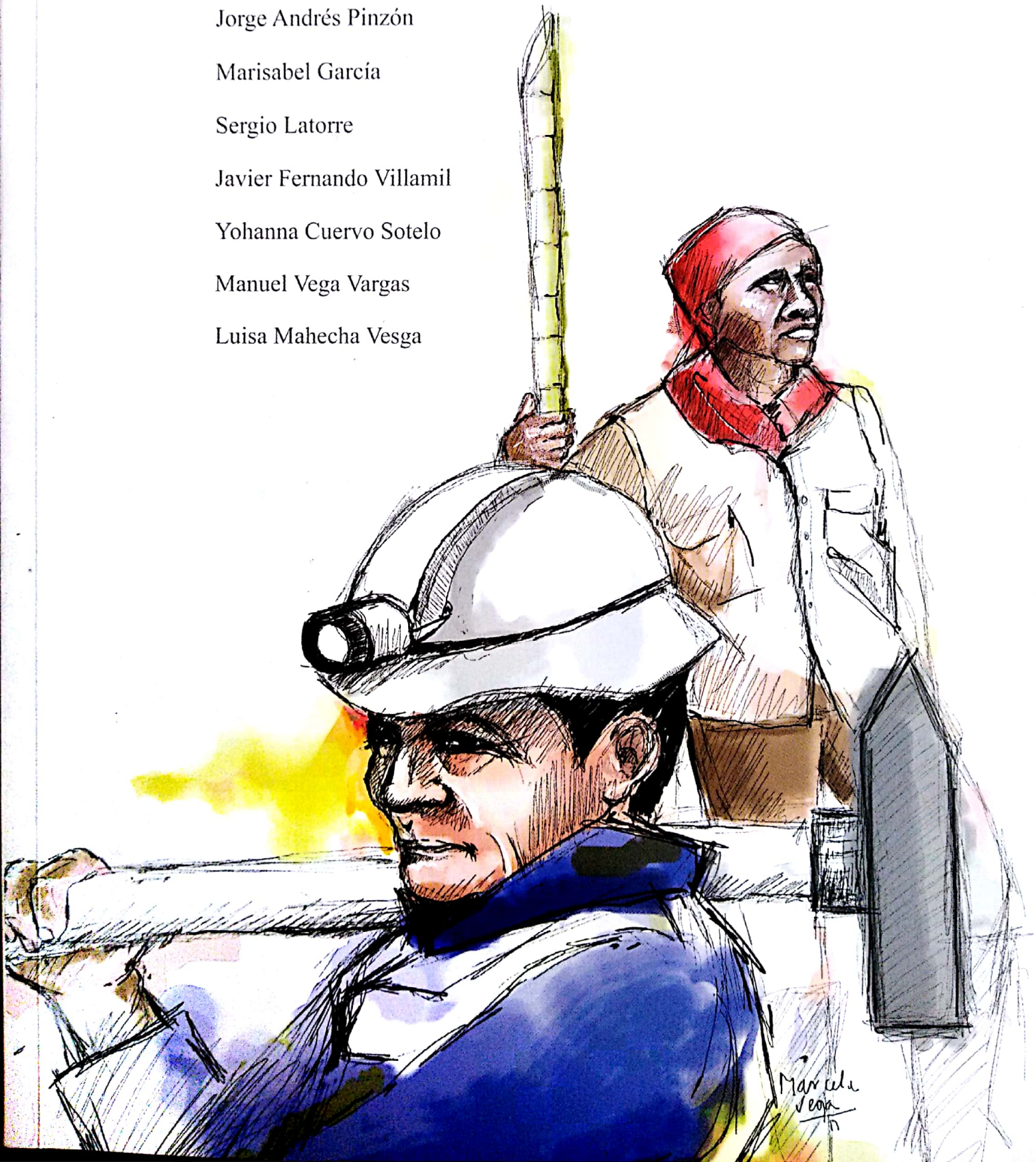
Sergio Latorre

Javier Fernando Villamil

Yohanna Cuervo Sotelo

Manuel Vega Vargas

Luisa Mahecha Vesga



Introducción

Durante la primera década del siglo XXI los debates en torno al sistema económico capitalista, tanto sobre sus características ontológicas como sobre los resultados de su desarrollo a nivel mundial, han ocupado un primer plano. Las preguntas por la división internacional del trabajo, por las brechas socioeconómicas entre y al interior de los países, por la perpetuidad de los conflictos bélicos, por las relaciones de dominación y explotación, por las consecuencias ambientales de los crecientes ritmos de producción y consumo y por la viabilidad ética del orden actual están a la orden del día no sólo en los recónditos círculos del debate intelectual y la academia, sino también, y cada vez más, en los cuestionamientos y quehaceres de miles de millones de personas en el planeta.

Del mismo modo, los términos que hacen referencia a los mega-proyectos en actividades extractivas parecen revestir cada vez mayor importancia para adeptos y críticos del modelo actual, todos ellos instalados dentro de un amplio abanico de interpretaciones y discusiones que van desde la desprevenida protección de *lo ambiental*, hasta las críticas que ponen en jaque las relaciones económicas, políticas y culturales propias de la configuración hegemónica del mundo contemporáneo. En medio de tal debate se realzan con ahínco los reclamos por la defensa de la vida, la soberanía y el territorio que hacen cientos de comunidades amenazadas, despojadas y violentadas (algunas exterminadas) en el marco de la expansión de una maquinaria extractiva instalada al compás de los mega-proyectos en todo el mundo.

En estas circunstancias, el siglo XXI se perfila menos como el momento del desenlace final y la victoria de un solo meta-relato en el mundo, lo que significaría condenar a la humanidad a la desaparición de los grandes cambios, y más como un horizonte conflictivo, quizás desolador—pero en la misma medida esperanzador—, que llama a la construcción y deconstrucción de los ordenes actuales. En un contexto así cobran relevancia los intentos por describir e interpretar la geopolítica, y es bajo ese ánimo que resulta posible acceder a los ingredientes de un debate pujante y conflictivo que reclama nuevas voces.

La presente publicación pretende contribuir a una discusión que, lejos de agotarse en lo conceptual y teórico, transita por los terrenos económicos y políticos de la vida cotidiana. Su intención no es sentar la última palabra ni mucho menos anclar miradas conciliadoras; pretensiones obtusas para una publicación de este tipo e insuficientes a la hora de leer una realidad en donde pululan conflictos de posturas, propuestas y actores difícilmente reconciliables. Este libro tampoco es una síntesis teórica, más bien supone la expresión de una arista interpretativa apoyada en la mirada crítica de una realidad plagada de contradicciones. Los escritos incluidos son un avance del trabajo realizado desde hace tres años por el *Grupo de Estudios Geopolíticos y Territoriales*, un espacio de reflexión frente a la temática de la geopolítica de los recursos naturales en el cual se realzan las tensiones y los conflictos de los actores, las instituciones y los hechos sociopolíticos que se materializan en formas de construcción y disputa de los territorios; todo ello bajo la sombra de diversos intereses en lucha.

Desde esta perspectiva, el presente libro tiene como objetivo exponer un panorama de la problemática de apropiación de los recursos naturales, resaltando los actores, sus conflictos y algunas de las opciones de cambio gestadas por aquellos que han sido afectados por las lógicas de acumulación contemporáneas. Las discusiones abordadas remiten constantemente al caso colombiano, sin embargo, no se trata de un texto sobre Colombia. Más bien, y atendiendo al carácter complejo de esta problemática, se propone una mirada integral a los conflictos que articula permanente las condiciones generales del sector, el desenvolvimiento del sistema capitalista y la división internacional del trabajo a escala global, la apropiación de los recursos en la región y las dinámicas relativas a las economías primarias en América Latina y Colombia. Así, la mirada de *lo general* se hace imprescindible para el examen de los casos *particulares*.

El libro comienza con un análisis en donde se identifican los cambios generales en el ámbito de la economía política y la geopolítica contemporánea. Para este propósito, el primer capítulo expone las políticas de ajuste económico direccionadas por países como Estados Unidos y reglamentadas desde organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estos factores y actores son medulares en las actuaciones de los Estados y las empresas transnacionales al interior de las economías extractivas.

En esta misma vía, el segundo capítulo se concentra en uno de los temas más controvertidos del actual orden mundial: las características de la acción violenta y el soporte militar sobre el que se configuran y sostienen los proyectos económicos de la extracción y en general, los mega-proyectos. Aquí el enfoque procura abordar la forma en que la violencia se constituye como parte inherente del modo de producción capitalista, expresándose como necesaria para instituir la lógica de acumulación. Esta reflexión permite una aproximación a la manera en que se establece el control territorial con miras a la apropiación de los recursos.

Del análisis del contexto general, desarrollado en los primeros dos capítulos, se avanza al tercer capítulo en donde se desarrolla un examen sobre los cambios recientes en el plano ideológico; cambios que han llevado a modificaciones en el marco de acción colectiva de los movimientos sociales. De igual forma, se exponen allí algunos ejemplos de organizaciones sociales latinoamericanas las cuales, desde la escena electoral o la movilización social, se oponen al *extractivismo*.

Una vez identificadas las características generales de la política económica, su conexión con la violencia y los conflictos armados y su contraste con el desarrollo de propuestas alternativas, el análisis se dirige al campo de las transnacionales y los mega-proyectos en América Latina. Así, en el cuarto capítulo se busca caracterizar y evidenciar la avanzada transnacional en la región, centrando la atención en los casos de la minería y los agrocombustibles. Este aparte devela la multiplicidad de estrategias que adopta el capital trasnacional para apropiarse de los recursos presentes en cada escenario local y demuestra cómo los elementos descritos previamente se materializan en conflictos sobre el territorio.

Posteriormente se aborda el caso colombiano como una muestra representativa del modelo minero energético global actual. Bajo un enfoque común, los capítulos quinto y sexto centran su análisis en los sectores de la minería y los agrocombustibles en el país, dando cuenta de las políticas estatales y de las consecuencias económicas, políticas, ambientales y sociales ocasionadas por estas actividades. El conjunto de impactos relatados constituyen discusiones de primer orden en la macroeconomía y la política nacional. En este punto se hace evidente que, si bien la lectura de la realidad local no puede separarse de la realidad global, tampoco puede hacerlo de las problemáticas estructurales a nivel nacional; de ahí que no

resulte extraño que la mirada al caso de los maga–proyectos de la minería y los agrocombustibles en el país remita de inmediato al problema de la tierra, de la repartición de la riqueza y de la división del trabajo.

Finalmente se propone un análisis coyuntural sobre la discusión del Proyecto de Acto Legislativo No. 13 de 2010, por medio del cual se reorganiza el modelo de las regalías en el país. Allí se recoge buena parte de los elementos analíticos expuestos en los capítulos anteriores. Lo interesante es que este debate supera el problema superficial de la distribución de compensaciones entre regiones y se instala en los problemas del modelo minero energético, la renta petrolera, la soberanía nacional y la disposición del poder y la economía a escala global. Se trata entonces de una mirada *no coyuntural de la coyuntura* que genera luces sobre el estado de la discusión en el legislativo y resalta posibles escenarios para la lucha política y social.

Como resultará evidente para el lector, este libro no procura agotar los debates en torno a la geopolítica de los recursos naturales o a la explotación minera y de agro–combustibles; temas de profundas resonancias en el presente. Sus ideas y argumentos deben ser tomados más bien como un resultado parcial dentro del proceso de lectura crítica de la realidad y del quehacer que adelantan las organizaciones pertenecientes al *Observatorio Social de Empresas Transnacionales, Megaproyectos y Derechos Humanos*.

“La crisis es la crisis de abajo; no llega nunca arriba. Basta que no les toque para que el mundo siga andando. No se dan cuenta de que cuando llegue la crisis climática nos tocará a todos: a ricos y a pobres.”

Nora Cortiñas, cofundadora de las Madres de la Plaza de Mayo

Capítulo 1.

El escenario geopolítico de los recursos naturales

Jorge Andrés Pinzón Rueda²

La deuda y el equilibrio mundial

El escenario contemporáneo revela un cambio aparentemente significativo en las condiciones sobre las cuales descansan las relaciones económicas y políticas a escala global. Los flujos de mercancías, información y personas parecen ganar mayor importancia a la hora de entender la organización de un mundo en permanente cambio. A su turno, se reafirma la idea del debilitamiento de las fronteras y de los Estados como dos hechos irremediables. Bajo la sombra del neoliberalismo, instaurado como modelo económico hegemónico a nivel global, florece la idea de un gradual debilitamiento del Estado como agente regulador y de un fortalecimiento del Mercado como único elemento dinamizador de las relaciones económicas y sociales.

El progresivo desmote de la acción estatal en la economía de la mayoría de los países del mundo, por cuenta de la denominada liberalización, ha implicado numerosos y significativos cambios en las características socioeconómicas a nivel global. Se trata de transformaciones en las

² Sociólogo, Especialista en Instrumentos de Ordenamiento Urbano-Regional, Magister en Urbanismo. Universidad Nacional de Colombia. Investigador del Grupo de Estudios Geopolíticos y Territoriales.

actividades productivas y de cambio, en las condiciones distributivas y de consumo en todo el mundo. Con cada vez menos fronteras, las economías nacionales tienden a especializarse y con ello la división del trabajo se acrecienta, como también lo hace la desigualdad entre los países, producto de un mayor desequilibrio en la distribución de las ganancias originadas en las actividades que generan mayor valor. Ante estos cambios de las relaciones económicas a nivel global surgen toda suerte de cuestionamientos sobre la pertinencia o no de este modelo económico *mercado*centrico. Sin embargo ¿se trata sólo de un problema del modelo económico?

Los cambios relativamente recientes en el análisis de la economía política del capitalismo advierten que, al revisar históricamente el sistema económico en los últimos siglos, sus características no son nada nuevas. Ya en el siglo XVI los postulados del derecho internacional, enunciados por Francisco de Vitoria, promulgaron la expansión de los mercados y las actividades comerciales con epicentro en Europa sin restricción alguna, amparados bajo la figura del derecho internacional y justificando con ello actos de conquista en caso de que esta expansión se viese obstaculizada. La búsqueda por una primacía de las relaciones desreguladas para el mercado también fue asumida en los siglos posteriores por las potencias económicas. El Reino Unido promocionó el libre mercado cuando el proceso de industrialización en sus ciudades se había convertido en el epicentro de la producción manufacturera del mundo entero. Justo en ese contexto, los propios postulados de la teoría económica clásica identificaban el libre mercado como un objetivo a alcanzar.

La búsqueda de la imposición del mercado en el marco de la economía mundial ha sido una constante que se explica por un hecho indiscutible: en el libre desarrollo de las fuerzas del mercado las posibilidades de consolidación de los más poderosos es mayor que en economías regularizadas. Por tanto, la puesta en marcha del neoliberalismo así como sus consecuencias, más que constituir un fenómeno novedoso, obedece a un proceso cíclico pero constante del capitalismo, el cual ha necesitado permanentemente la expansión de mercados, el flujo de mercancías, personas e información, el desvanecimiento de fronteras y la generación condiciones internacionales para su desarrollo. Así, globalización y libre cambio no son expresiones impúber dentro del contexto mundial, son más bien viejas características del sistema económico capitalista que se ha consolidado desde hace varios siglos.

Esta entonación histórica que evidencia el favorecimiento del mercado sobre el Estado como una constante cíclica en la historia del capitalismo, trae consigo un debate teórico significativo: ¿cómo se explica la supervivencia de la institución política más importante de la modernidad, el Estado-nación, dentro de un proceso que induciría a que, lejos de prevalecer como figura fundamental del contrato social, su destino fuese sucumbir ante la fortaleza de las fuerzas económicas engendradas en el mercado? Tal asunto puede, sin embargo, replantearse: ¿realmente se debilita el Estado en los ciclos fortalecimiento del mercado?

La estructura social que emerge del sistema capitalista presenta pronunciadas tensiones sociales producto de la relación de las clases sociales con respecto a los medios de producción y la consecuente generación social de la riqueza. Es indispensable para el sostenimiento del sistema la producción de una *paz social* que mengüe los conflictos derivados de la desigualdad intrínseca a esa estructura social. Para lograr tal objetivo se requiere de una institución social destinada, por una parte, a aliviar suficientemente las desigualdades para que el conflicto social no tome el camino a la sublevación frente a las condiciones existentes, y por otra, a fungir como herramienta coercitiva que reprima cualquier elemento que pueda amenazar la estructura social. Dicha institución es el Estado, el cual, lejos de ser el resultado del consenso unívoco de todas las partes de la sociedad o la materialización del contrato social, es una institución destinada a la defensa de las relaciones políticas y económicas de la estructura social.

Por tanto, el Estado-nacional, hijo de la modernidad y del capitalismo moderno, es indispensable para la existencia del sistema económico. Mercado y Estado no son antagónicos sino complementarios y necesarios entre sí. El capitalismo requiere de un mercado libre y de un Estado fuerte para su consolidación y desenvolvimiento. Un mercado libre para dinamizar el proceso productivo orientado al lucro y fomentado por la propiedad privada de los medios de producción y un Estado fuerte que atenúe los conflictos emergentes del proceso productivo, que garantice las condiciones legales para su existencia y que dirija la fuerza para evitar la revuelta social.

Pero además, el Estado es indispensable para que, dentro del propio marco de las relaciones económicas, se consoliden las condiciones que dan vida

a los principios fundamentales del sistema económico, el cual requiere no solo de la desigualdad entre sectores poseedores y desposeídos de los medios de producción, sino también la desigualdad al interior de los primeros, ya que el motor de la actividad económica en el capitalismo es la concentración de la riqueza.

La acumulación de capital es el proceso que da vida al capitalismo pues con ella se generan las condiciones para la proliferación de la inversión, lo que a su vez dinamiza los procesos productivos generando empleo, aumentando las capacidades de consumo y fomentando el desarrollo de diversos sectores de la economía. Pero la tendencia al monopolio que conduce a la acumulación inicial, y que por consiguiente es condición para la supervivencia del sistema, no se presenta como consecuencia exclusiva de las dinámicas económicas del mercado. Ella necesita unas condiciones favorables que beneficien a determinados sectores productivos e incluso a empresas específicas. Para que estos favorecimientos extraeconómicos sean posibles son imprescindibles una serie de instituciones jurídicas, diplomáticas, militares y culturales, que doten de fuerza y legitimidad a los monopolios. De ahí que sea el Estado uno de los principales garantes de este proceso.

Ahora bien, los Estados se encargan de evitar los excesos de los monopolios pero también de crearlos, y dado que el sistema capitalista es un sistema que se ha expandido al mundo entero, las relaciones monopólicas no se limitan a las economías internas de los países. Los mayores monopolios son de talla mundial y las legislaciones estatales resultan bastante permisivas frente a ellos. La revisión de las características contemporáneas resulta reveladora al respecto.

Después de la segunda guerra mundial, Estados Unidos emergió como potencia hegemónica indiscutida a nivel global. A diferencia de los demás países industrializados, es decir los de Europa Occidental, la guerra no había afectado el sistema productivo norteamericano, por el contrario, el acelerado crecimiento y eficacia que había adquirido desde el siglo XIX no encontró rival alguno a mediados del siglo XX. Superada la recesión de los años treinta la guerra impulsó su economía y destruyó a sus competidores. El acuerdo de Yalta incorporó a la Unión Soviética dentro del sistema económico mundial pues aunque esta nación poseía un modelo político y económico alternativo, en realidad nunca supuso una amenaza efectiva para la

hegemonía consolidada por Estados Unidos. Las condiciones permitían la fácil generación de monopolios, tal como sucedería. El sistema productivo de Estados Unidos podía abastecer no sólo a su población sino al mundo entero, pero para ello requería generar una demanda respectiva. El plan Marshall – llamado oficialmente *European Recovery Program* – tenía ese propósito. Así, la ayuda de los Estados Unidos para la reconstrucción de Europa buscó la generación de demanda de aquello que producían los americanos, de tal forma que se garantizara el éxito del crecimiento del sistema productivo de su país.

El periodo de postguerra se caracterizó por un crecimiento económico y productivo sin precedentes en la historia de la humanidad en el cual la acumulación de capital fue inmensa y se garantizó la generación masiva de empleos, el aumento de la capacidad de consumo y por ende, el dinamismo de una gran cantidad de sectores productivos en Estados Unidos. Esto sucedería también, pero de manera gradual, en los países que mayor ayuda habían recibido, es decir, Europa Occidental, Japón e incluso (aunque en menor medida) algunos países latinoamericanos que venían desarrollando procesos de industrialización y urbanización significativos. Este dinamismo económico permitió a los Estados del hemisferio occidental patrocinar un régimen de bienestar relativamente generalizado, en el cual se ampliaron las coberturas de los sistemas de seguridad social, de salud y de dotación de servicios públicos. En suma, la protección social que apareció por esos años constituirá una estrategia sumamente útil para la consolidación de un proyecto de paz social generalizado, destinado a disipar el cuestionamiento sobre los monopolios, sobre la concentración de la riqueza y sobre la acumulación de capital a nivel mundial.

Ese mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los países del hemisferio condujo a una aparente fe sobre el progreso del sistema económico como medio para lograr, de manera paulatina, una disminución de los problemas socioeconómicos más apremiantes; llegando por esa ruta cada vez más cerca de la equidad social. Siguiendo estos postulados, los Estados adoptaron un modelo de protección que consistía en la defensa de las industrias nacionales, a través de la creación de barreras a los intercambios para que los enclaves internos de los países se fortalecieran, es decir, interviniendo el mercado para que las empresas nacionales tuvieran ventajas y con ello se pudieran desarrollar. Este esfuerzo debía propiciar la acumulación de capital, el empleo y los excedentes suficientes para que los

Estados contarán con recursos destinados a garantizar la inversión pública que requería el Estado de Bienestar.

El proceso de crecimiento de las economías en el mundo permitió que los monopolios de Estados Unidos tuviesen cada vez menos ventajas en el marco de la competencia económica mundial, por cuenta del desarrollo de procesos productivos cada vez más eficientes en latitudes como Europa occidental y Asia oriental. Esta última en cabeza de Japón. La disminución del carácter monopólico de la economía mundial implicó una reducción de las ganancias para los sectores de vanguardia que dinamizaban la economía a escala planetaria. Los efectos fueron contundentes. Para finales de la década de los sesenta se avizoraban disminuciones en las tasas de empleo e ingreso, en la capacidad de consumo, en las ganancias de los empresarios e incluso, en la balanza fiscal de los Estados. Todo ello condujo a reducir la inversión pública y, por esa vía, a disminuir las posibilidades de generar mejores condiciones de vida para el grueso de la población.

Se ingresaba así al ciclo de contracción propio del sistema económico, el cual tiene lugar cada vez que las ventajas hegemónicas empiezan a palidecer frente al surgimiento de nuevos ejes productivos eficientes y competitivos. Hay que decir que los ciclos de expansión y contracción se han repetido constantemente a lo largo de la historia del capitalismo y en ellos las hegemonías de antaño, bien sea el Reino Unido o los Países Bajos, han sufrido una pérdida gradual de su poder, lo que ha conducido a un debilitamiento no sólo de su economía sino del sistema económico en general. No hay duda, las crisis económicas han sido repetitivas y periódicas, pero sobre todo, similares en sus causas generales. Sin embargo, en el caso de esta última entrada al periodo de crisis, existió un factor que aceleró fuertemente el proceso: la subida de los precios del petróleo convenida por la OPEP a comienzos de la década de los setenta. Con este hecho se catalizaron los efectos negativos que supone habitualmente el ciclo de contracción.

La lógica que guía la actuación de quien invierte en el sistema capitalista es ubicar los capitales en aquellos sectores que brinden una alta ganancia. Por lo tanto, en condiciones normales, y ante un proceso de pérdida de ganancias, los sectores más poderosos trasladan los capitales hacia sectores más rentables. El capitalista no es fiel a un sector específico, es fiel al afán de lucro. Cuando se trata de un periodo de recesión el sector que resulta

más atractivo es el financiero, dado que las actividades productivas, el sector real, pierden gradualmente su rentabilidad. El sector financiero se sostiene gracias a la especulación, es decir, que él crece no en función de una actividad económica productiva (de un proceso de transformación material o desarrollo intelectual) sino gracias a los intereses que surgen de los préstamos del sector bancario.

La situación actual revela entonces dos ángulos que conducen hacia el mismo vértice. De una parte, los Estados han perdido capacidad económica debido a que las actividades productivas son cada vez menos rentables, lo que ha generado desempleo y menos capacidad de consumo. La reducción de la demanda implica a la vez menos producción. Así, se dibuja un círculo vicioso en el cual las demandas sociales son cada vez mayores y cada vez hay menos recursos con que aliviarlas. Por otra parte, los grandes capitales que se han trasladado al sector financiero requieren generar ganancias que justifiquen la inversión. La solución entonces es el endeudamiento masivo, fomentado por la necesidad de unos y por la imposición de otros.

La deuda externa ha sido una constante en las relaciones entre los países dominadores y los países dominados. En gran medida ella garantiza que tal relación sea desigual. Pero desde la década de los setenta la situación de la deuda se ha agravado. La solicitud de créditos ha sido promovida por los organismos multilaterales en consorcio con la banca transnacional y los gobiernos poderosos, pero también ha sido fruto de la crisis interna de los países, especialmente los del tercer mundo, quienes habitualmente sucumben más rápido ante las crisis globales. La situación ha sido más dramática en aquellas naciones que, por no contar con reservas de hidrocarburos, terminaron golpeadas gravemente con el aumento del precio del petróleo.

Aunque los dineros que han ingresado por cuenta del crédito externo parecen estar destinados a aliviar el déficit interno, el endeudamiento resulta ser más perjudicial que benéfico. Evidentemente, por esta ruta se han generado los recursos para mantener la inversión y el gasto público, pero ¿cómo pagar un préstamo y sus intereses cuando cada vez son menos los recursos que se tienen? Para los Estados que han afrontado una crisis económica cuyas causas son externas a sus voluntades y acciones, los préstamos adquiridos resultan a corto plazo una forma de mantener el

balance de ingresos y de gastos, pero a mediano y largo plazo implican un gasto adicional que resulta impagable.

Frente a esta crisis generalizada el sistema económico tuvo que ajustarse para sobrevivir. Países como México declararon imposible el pago de la deuda a comienzos de la década de los ochenta y desde entonces ha tenido lugar el fenómeno denominado la crisis de la deuda. Sin embargo, esta no es una crisis surgida al interior de las naciones, es, en breves palabras, el costo que deben pagar los países pobres por las crisis generadas en los países ricos para mantener el sistema económico en pie.

La solución para esta crisis puso en evidencia una nueva faceta política de los sectores poderosos en el mundo. Encabezados por los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, los gobiernos del norte y los grandes capitales mundiales desmontaron desde la década de los ochenta el modelo de Estado de Bienestar recurriendo para ello a Planes de Ajuste Estructural. ¿Por qué hacerlo? Los argumentos son numerosos, pero con el ánimo de simplificar se puede dirigir la atención sobre la razón que motiva al capitalismo a existir: la acumulación de capital. Si ésta ya no es posible por la simple competencia, dado que los monopolios de la potencia hegemónica han perdido poder, es necesario generarla por otros medios, al menos mientras se vuelven a consolidar otros monopolios, es decir, cuando se retorne a un ciclo expansivo caracterizado por la concentración en las actividades productivas que generan mayor valor.

En efecto, lo habitual en un ciclo de contracción es que las actividades productivas se dispersen, pues con ello la ganancia surge de la disminución de los costos de producción. En otras palabras, en el marco de una crisis global los grandes capitales son trasladados a lugares donde los costos de producción (incluyendo el costo de la fuerza de trabajo) sean menores, o bien a sectores económicos que generen nuevas ganancias. Entonces la apertura económica, la desregularización, el incentivo a la inversión extranjera directa, la flexibilización laboral, la privatización y el propio pago de la deuda aparecen como las soluciones generadas para soportar la crisis estructural del sistema económico, o de otro modo, como una forma de supervivencia sostenida a costa del saqueo de la riqueza del denominado Tercer Mundo.

Es importante insistir en que esta situación, para nada nueva dentro de la historia del sistema capitalista, responde a una lógica fácilmente reconocible en la cual la riqueza del norte es sostenida por el sur. Bien sea que se trate de excedentes productivos, de la plusvalía o de recursos naturales, el equilibrio del sistema capitalista se ha estructurado sobre relaciones de explotación al interior de las sociedades, así como sobre formas de dominación entre países y entre sectores sociales que se mantienen a nivel mundial desde hace ya más de quinientos años.

¿Quién le debe a quién?

La deuda y los recursos naturales

La presión de la deuda externa sobre las naciones empobrecidas ha hecho que las condiciones sobre las cuales se desenvuelven los países en el escenario mundial sean enormemente desiguales. El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la banca transnacional y los gobiernos dominantes, junto a otras instituciones de primer nivel, imponen una serie de condiciones político-económicas sobre sus deudores. Más allá de los métodos utilizados, estas condiciones suponen generalmente el saqueo de recursos naturales, especialmente de los más rentables y estratégicos, como los minero-energéticos.

Se trata de una especie de canje en el cual las riquezas de las naciones son puestas a disposición del mercado mundial a cambio, generalmente, de la construcción de infraestructuras dispuestas para la producción y la exportación (y sólo eventualmente para sistemas de bienestar social destinados a propiciar la paz social). Pero en la medida en que los elementos recibidos por los países implican el fomento de la lógica de integración al sistema mundial, dicho canje es enormemente injusto. La situación se podría ilustrar del siguiente modo: las ventajas económicas de las naciones empobrecidas son aprovechadas por las potencias y sus recursos saqueados, ya sea por medio de economías extractivas o por la apertura al capital transnacional, a cambio de la permanencia de dichas relaciones. En efecto, no parece tener sentido que la deuda y los condicionamientos generados por la misma sean pagados por toda la población (incluyendo las siguientes generaciones que desde antes de su nacimiento ya están endeudadas), mientras los beneficios de la misma estén encaminados a

favorecer los intereses monopólicos de las élites locales y de las empresas transnacionales.

Lo interesante es que la explotación de los recursos naturales no escapa a este andamiaje de relaciones político-económicas de evidente dominación. A pesar de la importancia cada vez mayor de las actividades comerciales, de los servicios, del sector financiero y en menor medida de las actividades industriales (todo ello dentro de la jerarquía contemporánea de los sectores económicos a nivel mundial), es insoslayable la centralidad de aquellas condiciones materiales que directa o indirectamente son producto de la transformación de los recursos naturales; bien sea que se trate de las materias primas de los artículos industriales, de los bienes de consumo, intermedios o de capital, del soporte material directo o indirecto de las actividades comerciales y financieras o de los alimentos necesarios para la supervivencia de las personas que hacen parte de la actividad económica.

En el capitalismo moderno la explotación de los recursos naturales se enmarca en una relación de dominación entre países y sectores sociales. Esta relación, que bien puede entenderse como una prórroga de las dominaciones coloniales, produce una división internacional del trabajo en la cual los países dominados y dependientes mantienen una fuerte especialización en economías extractivas tanto de materias primas como de recursos energéticos. Los dos son fundamentales para el dinamismo y fortalecimiento de los países “desarrollados”, quienes por medio del desarrollo técnico y del dominio del sector industrial, comercial, financiero y militar, imponen modelos políticos, económicos y culturales al resto del mundo.

Dado que en la actualidad la potencia hegemónica del sistema mundial es los Estados Unidos, la caracterización de este país en la geopolítica de los recursos naturales resulta ejemplar para evidenciar el funcionamiento de las relaciones político-económicas a nivel mundial. Actualmente este país tiene una población cercana a los 300 millones de habitantes, es decir, menos del 5% de la población mundial, y sin embargo consume más del 35% de los recursos energéticos. Ello genera dos fenómenos particulares: de una parte promueve un enorme desequilibrio del consumo energético per cápita entre los países del sur y del norte. De otra, incentiva la explotación de recursos a lo largo y ancho del planeta en procura del beneficio interno de dicho país.

El alto consumo energético per cápita de los recursos naturales del planeta por parte de Estados Unidos (incluido los energéticos), recrea la naturaleza de una sociedad de consumo avasalladora. Sólo sobre esta voracidad energética se puede mantener una economía basada en la producción irracional de bienes. Y es posible llamarla irracional pues se produce mucho más de lo que se consume, lo que genera, de una parte, el desperdicio desahogado de recursos y productos (muchos de estos diseñados para tener una vida útil limitada) y de otra, una tendencia a la sobreproducción que fomenta las crisis económicas cíclicas.

Ahora bien, el problema de la desigualdad en la apropiación y consumo se evidencia no solo en la comparación entre naciones, sino también al examinar el grueso de la población mundial. En efecto, el quintil de la población más rica del planeta consume más del 80% de los recursos mundiales, mientras que el 60% más pobre consume menos del 6% de los mismos. Esto no sucede solamente con los recursos energéticos. El consumo de agua es igual de inequitativo. Una persona en los países “desarrollados” puede alcanzar un consumo promedio de 300 litros diarios, que es sustancialmente superior a los 25 que se consumen en promedio en los países “subdesarrollados”. Este último dato resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta que el consumo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, para las necesidades vitales e higiene personal, es de 80 litros.

Estas cifras revelan cómo la expansión monopólica acrecienta los problemas de la pobreza en vez de solucionarlos y cómo los postulados que equiparan la inversión privada a empleo y bienestar social parecen no ser más que ironías. En efecto, las 200 mayores empresas controlan el 28% de la actividad económica del mundo pero emplean alrededor de 0,25% de la fuerza de trabajo disponible a nivel global. La privatización de la riqueza es el común denominador del actual sistema económico mundial. De los 100 entes más poderosos del mundo, 51 son multinacionales y sólo 49 son Estados. A su vez, el capital de las 84 personas más ricas del mundo es mayor que el producto Interno Bruto de China, país que tiene una población superior a los 1300 millones de habitantes.

Este orden mundial es producto de relaciones económicas originadas en la apropiación y monopolización de sectores estratégicos como el financiero, el comercial, las industrias de vanguardia tecnológica y los propios recursos

naturales y energéticos. La extracción de los dos últimos, en particular, genera una acumulación de capital facilitada por la imposición de modelos de dominación económica y política; imposición que se enmascara bajo panaceas como la idea del desarrollo y el progreso. Esto es así porque los sectores económicos que tienen el control de los recursos y la energía tienen también el control de las fuerzas productivas, es decir, de la producción de los bienes y servicios que se consumen en el mercado mundial. En otras palabras, los sectores dominantes de los países enriquecidos son aquellos que se apropian de la explotación de recursos naturales y con ellos realizan procesos de transformación que generan riqueza y excedentes destinados al desarrollo de sectores inmensamente rentables como el comercio y la banca.

Como resulta evidente, esta configuración mantiene una división internacional del trabajo inequitativa en la cual las actividades más rentables y de vanguardia en el sistema económico se concentran en los países ricos (cuyos excedentes tienden a beneficiar de manera tangencial al grueso de la población de estos países), mientras que los sectores extractivos y productivos menos rentables se ubican en los países pobres, donde los costos de producción son más bajos (abaratamiento de la fuerza de trabajo, extensión de impuestos, flexibilización laboral, externalización de costos sociales y ambientales, etc.). El resultado de esta situación es el aumento de la brecha socioeconómica entre las sociedades y al interior de ellas.

Pero allí no termina la discusión, hace falta la dimensión ideológica. Solo desde un discurso hegemónico, que entiende el consumo como *máxima* del bienestar, es posible afirmar que el estilo de vida de las sociedades enriquecidas se ha convertido en la mejor expresión de la democracia y la libertad. Sin embargo, en realidad, ese estilo de vida descansa en relaciones de explotación internacional e intrasocial. Los países enriquecidos promueven por medio de los gobiernos estatales, la banca transnacional, los organismos multilaterales y las empresas transnacionales, la explotación de recursos en el planeta (especialmente en los países pobres) para mantener sus economías dinámicas y en constante crecimiento. La pretendida libertad es entonces un sofisma que evade las consecuencias estructurales de un sistema necesitado de la desigualdad y la explotación. La libertad de mercado se reduce así a la libre posibilidad

de imponer poderes económicos y políticos entre individuos, instituciones, organizaciones y naciones.

A su turno, el problema de los equilibrios entre los Estados, y específicamente la pregunta por quién ampara y soporta a quién, no se solventa únicamente acudiendo al problema de la deuda económica; pagada ya varias veces por los países deudores a razón de los altos intereses. Este enfoque implicaría aceptar que los países pobres le deben a, y dependen de, los países ricos. Por el contrario, las dinámicas actuales de la geopolítica de los recursos naturales, así como la división mundial del trabajo, ponen de manifiesto que los países pobres soportan con sus recursos naturales y con su plusvalía la riqueza, tanto de las elites locales, como de las internacionales. Ello ha sido una constante de los últimos siglos, periodo de germinación y consolidación del sistema capitalista mundial.

Hay que recordar que en los orígenes del sistema capitalista moderno las relaciones de dominación entre países dominados y dominantes se expresaban en una institución formal: la colonia. En ella, los intereses de las élites de las metrópolis se plasmaban sin reparo alguno sobre los territorios colonizados, extrayendo recursos y riquezas para las potencias imperiales europeas. Ahora, en pleno siglo XXI, la situación cambia en forma y apariencia, pero no en sus elementos fundamentales.

En la actualidad, la institución que soporta las relaciones de dominación internacional es el producto de una amalgama de relaciones político-económicas que se dinamizan gracias a la actuación de los protagonistas del sistema económico mundial. En efecto, las empresas transnacionales no sólo tienen injerencia en las actividades comerciales, productivas y extractivas, también son agentes decisivos en las dimensiones políticas y macroeconómicas de las naciones. Favorecidas por el poder económico que obtienen y por su alianza con sectores estratégicos en el funcionamiento de los países sujetos a las lógicas capitalistas estas empresas se convierten en los nervios y los músculos de la mano invisible atrás del mercado y los gobiernos. La alianza entre los grandes capitales y los Estados es una característica intrínseca de las multinacionales y transnacionales. Para su expansión necesitan dominar las decisiones políticas tanto de las grandes potencias como de los países dependientes, y para ello recurren al beneplácito de los gobiernos y de los sectores multilaterales o, en su defecto, a la imposición de la fuerza como medio justificado de acción.

Como se ha intentado mostrar, los fenómenos recientes en la política macroeconómica tejida por el proyecto neoliberal, corresponden a una fase repetida del sistema capitalista en donde se requiere el sostenimiento de condiciones de desigualdad al interior de las sociedades y entre ellas. No obstante, el análisis de la situación contemporánea de la geopolítica mundial también revela la presencia de cambios originados en las relaciones entre actores. Se trata de actores que luchan por imponer condiciones que, aunque permanentes en la historia del capitalismo como sistema, varían en cada momento histórico y tienden a agudizar los conflictos y a debilitar la paz social.

El cambio del modelo económico contemporáneo

En las últimas dos décadas del siglo XX se formularon una serie de políticas impulsadas desde el gobierno e instituciones particulares de Estados Unidos con el fin de generar un crecimiento de las economías nacionales alrededor del mundo. Inicialmente, estas se construyeron para ser implantadas únicamente en Latinoamérica, pero posteriormente se convirtieron en un programa de política económica generalizado a nivel global. Dichas formulaciones, en suma, generaron una compilación de propuestas macroeconómicas que fueron conocidas como el *Consenso de Washington*.

El planteamiento que pretendió legitimar la inserción de estas políticas fue la búsqueda de una solución al inmenso problema de la deuda que aquejaba desde la década de los setenta a la mayoría de los países, y con mayor severidad, a los del denominado Tercer Mundo. Bajo este pretexto, las directrices plasmadas en dicho Consenso promulgaron la reducción de la participación del sector público en la actividad económica de las naciones de tal forma que, bajo los postulados de *disciplina presupuestaria*, *cambio en la estructura del gasto público* y *reformas fiscales*, se pudiese disminuir el gasto del Estado, facilitar el pago de la deuda y mantener un balance de los presupuestos nacionales. La traducción de estas orientaciones suponía que el sector público debía invertir cada vez menos, limitando progresivamente los gastos ponderados a las subvenciones y a los sectores de educación y la salud. Al tiempo, debía producirse un aumento de los impuestos como forma de equilibrar las finanzas estatales; aunque esto

último no constituyó en principio un pilar importante de las reformas planteadas.

En cuanto al manejo de los intereses sobre la deuda, el Consenso propuso que estos fuesen establecidos bajo la lógica del mercado, procurando que fuesen siempre más altos que las tasas de inflación. Ello implicó que se elevaran enormemente, atendiendo a los intereses del sector privado en una época de recesión económica. Así, el problema de la deuda, lejos de superarse, tendía a perpetuarse. La promoción a una mayor participación del mercado también tuvo lugar en el caso del cambio bajo el objetivo de la competitividad económica. Se transformaron los *tipos de cambio de equilibrio fundamental*, en los cuales los Estados tenían una profunda injerencia, por una mayor liberalización de los flujos comerciales entre los países, ahora con una sustancial participación por parte del sector privado.

Tras el énfasis en las actividades económicas relativas al interés y al cambio propio del Consenso estaba la preponderancia que se le quería otorgar al libre mercado. En efecto, la liberalización comercial, uno de los elementos más importantes de este proyecto, implicaba que el Estado desmontaría gradualmente las regulaciones frente a los flujos comerciales para que se diera paso a un estadio de *libre competencia* en el cual sólo se brindaría protección temporal a algunas industrias nacientes, mientras las economías nacionales se sumergían en las condiciones y dinámicas del mercado internacional.

En los países del Tercer Mundo se dio especial resonancia a los impulsos generados por estas reformas de la política económica. Entre tanto, las políticas de apertura relacionadas con la *Inversión Extranjera Directa*, aunque no se enunciaron explícitamente, fueron muy relevantes en el marco de la redefinición de las relaciones macroeconómicas de las naciones. Es decir, que bajo el enfoque impulsado por el Consenso se dio vía libre a la inversión de capitales foráneos en sectores productivos, so pretexto de que esta inversión brindaba tecnología y experiencia, fomentaba la producción de bienes necesarios en el mercado nacional y contribuía a nuevas exportaciones y a un aumento del dinamismo por medio de la inserción de nuevos capitales.

Junto a la Inversión Extranjera Directa este modelo económico propició una fuerte política de privatizaciones amparada en la idea de un mejoramiento

del balance fiscal de los Estados. Según sus promotores, la venta de las empresas públicas permitiría ingresos inmediatos y evitaría la inversión a largo plazo. Pero estos no serían los únicos argumentos. Para corrientes defensoras de la omnipresencia del mercado en la economía como la que guió al Consenso de Washington, las empresas impulsadas por el sector privado eran más eficientes que las estatales, toda vez que la expectativa individual guiada por el beneficio particular resultaba ser mejor a la hora de maximizar las ganancias de las empresas.

En suma, el fomento a la Inversión Extranjera Directa y a la privatización dado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el gobierno de Estados Unidos (con el Plan Baker) desde la segunda mitad de la década de los ochenta, permitió la injerencia de capitales externos en las economías de los países; capitales que se abalanzaron sobre los sectores estratégicos, es decir, sobre aquellos de mayor importancia y mayor rentabilidad, como la prestación de servicios públicos.

Otro elemento fundamental en la implantación del modelo económico auspiciado por el Consenso fue la desregularización, proceso que para el caso latinoamericano implicó un cambio sustancial en la política macroeconómica. En efecto, desde la segunda postguerra América Latina venía siguiendo la tendencia del proteccionismo de la industria nacional y la regulación, lo que suponía dar al Estado el control frente al establecimiento de compañías, de inversiones (especialmente extranjeras), de flujos de transferencia de beneficios, así como el control de precios, la implantación de barreras a la importación, la asignación de créditos y las imposición de tasas tributarias sobre la renta de las empresas. Por lo tanto, la aplicación de las medidas propuestas por el Consenso implicó una transformación significativa dentro de la macroeconomía de estos países y de sus características socioeconómicas.

Ahora bien, la implantación de los mecanismos que condujeron a un cambio del modelo económico se generalizó gracias a las presiones externas y al amparo o condescendencia de los gobiernos de los países que la facilitaron. En la puesta en marcha de estas reformas fue necesaria la generación de bloques de poder compuestos por los sectores dominantes de la potencia económica y militar del último periodo, Estados Unidos. Ellos diseñaron las directrices del funcionamiento del sistema económico y conformaron una hegemonía política, económica y militar puesta en marcha con el

consentimiento de las elites nacionales favorecidas por el orden mundial contemporáneo. En el ámbito nacional estas elites han direccionado el poder gubernamental en favor del modelo neoliberal ya que ostentan un poder estatal conseguido bien por medio del sufragio o bien, por medio de una avanzada política violenta.

Lo cierto es que la gradual imposición de los cambios en el modelo económico por medio de la acción estatal ejemplifica claramente la intrínseca relación que existe entre el direccionamiento político de los Estados y los intereses hegemónicos guiados por la acumulación de capital, todo ello en un proceso eminentemente desigual a escala local y global. Pero aún con el control geopolítico sobre los gobiernos y el funcionamiento estatal, fueron necesarios otros mecanismos de presión que fomentaran e incluso originaran un discurso legitimador para el proceso de cambio en la política económica. Dentro de ellos se destaca el papel del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, quienes en conjunción con los gobiernos del norte, especialmente el de Estados Unidos, sometieron las políticas nacionales bajo los condicionamientos de la financiación.

En efecto, la ayuda económica prestada por las instituciones multilaterales y por la banca transnacional está determinada por una serie de imposiciones políticas acordadas desde el centro del sistema económico. En las últimas décadas estas imposiciones fueron aplicadas como si se tratara de una receta para la macroeconomía de todos los países del mundo, sin que importara el contexto histórico ni el dinamismo sociopolítico de cada una de las naciones. Estas recetas son los *Planes de Ajuste Estructural*, elaborados gracias al accionar geopolítico de la hegemonía reinante y cuyo cuerpo principal ha sido el mismo del Consenso de Washington; de ahí que no sea nada extraño que éste lleve por nombre la capital política de la nación más rica del planeta.

Los Planes de Ajuste Estructural han sido aplicados en más de noventa países en el mundo caracterizados históricamente por ser periféricos dentro del orden económico y político planetario. Pero no hay duda que en esta dinámica los países de América Latina se han convertido en evidentes abanderados, lo mismo que muchos de los países pertenecientes a la ex Unión Soviética, los cuales han iniciado una acelerada transformación hacia un modelo centrado en las lógicas del mercado.

La composición de estos planes se traduce en cambios de dos tipos. De una parte, en la implementación de políticas de estabilización, entre las cuales se contemplan las relativas a los cambios y ajustes fiscales para menguar los problemas relacionados con el déficit fiscal de los Estados (en donde el problema de la deuda es un elemento central). Allí la principal herramienta es la austeridad en el gasto público, incluyendo en algunos casos la disminución de la inversión y la transformación de la política monetaria y cambiaria. De otra parte, en la transformación de la estructura de la economía política de las naciones. Allí se destaca el afán de generar crecimiento económico influyendo en las tendencias económicas de la demanda y la oferta internas; especialmente encogiendo la demanda para generar excedentes que se dispongan a la exportación y con ello hacer más fácil el pago de la deuda externa. La construcción teórica para tal cometido no es otra que la ortodoxia de la economía liberal. Según ella, la garantía para hacer eficiente y creciente la producción interna consiste en dejar actuar al mercado bajo el supuesto que la iniciativa privada, en escenarios de competencia, tiende a generar actividades más competitivas en un proceso de especialización que fomenta las ventajas comparativas de las naciones. Es por esta ruta que ha tenido lugar el proceso de consolidación de economías deformadas, especialmente en los países más empobrecidos, como se analiza en el tercer capítulo del presente libro.

Los cambios en las relaciones comerciales, la desregularización, la privatización y la apertura económica se acompañan de planes de ajuste que llevan consigo la devaluación de la moneda y la eliminación de todos aquellos obstáculos institucionales y administrativos que le impiden al capital su desenvolvimiento y acumulación. Entre ellos vale la pena mencionar las regulaciones del mundo del trabajo, las cuales, al ser transformadas, introducen un desmejoramiento sustancial de las condiciones de los trabajadores. En efecto, los problemas y dilemas relativos a los sistemas laborales y a la concepción del trabajo dentro de este enfoque neoliberal constituyen uno de los elementos más conflictivos dentro de la estructura socioeconómica mundial. Ellos ponen en entre dicho la paz social y alimentan los conflictos sociales que se han manifestado con claridad en diversos países desde la última década del siglo XX.

La desregularización de los sistemas laborales responde a un objetivo central de estas reformas: el aumento de la productividad y la competitividad. Dado que uno de los elementos más importantes para la acumulación

del capital es la reducción de costos, una de las formulas para lograr el aumento de la productividad es abaratar el costo de la fuerza de trabajo. Ello se consigue, a nivel macro, flexibilizando la legislación laboral, de tal forma que los empleadores puedan pagar salarios más bajos y evitar los costos de la seguridad social.

Estas y otras medidas, lejos de ser una simple propuesta, una iniciativa o una recomendación de los organismos multilaterales, en conjunción con los gobiernos de las potencias económicas, particularmente el de Estados Unidos, se han convertido en procesos de aplicación sistemática en muchos de los países de África, Asia, Europa del Este y Latinoamérica. Se trata de un proceso de transformación gradual pero acelerada de las relaciones económicas, en el cual el sector público, bajo la sombra del modelo del *Estado de Bienestar*, se ha desvanecido para dar paso a un modelo *mercado-centrico*. En este modelo la privatización, la apertura a capitales extranjeros, la desregularización y la libre competencia son los eslabones más importantes. Entre tanto, en la superficie, la competitividad, la productividad, la eficiencia, el crecimiento económico e incluso la equidad se presentan como los objetivos y principios centrales en el discurso de quienes han abogado por este modelo. Pero en el alba del siglo XXI los corolarios de estas iniciativas reflejan enormes contradicciones que deberían suscitar una gran desilusión en sus defensores. Hoy habría que dar la razón tanto a las voces que han criticado la implantación de estas medidas desde hace décadas como a quienes identifican en este proceso una evidencia de la insostenibilidad no sólo del modelo neoliberal sino del sistema capitalista en su conjunto.

Conflictos del modelo contemporáneo

En términos generales, los remedios aplicados a la reciente crisis del capitalismo han surtido efecto aunque no la han solucionado. Esto quiere decir que los cambios implantados en las políticas económicas a nivel mundial han permitido de nuevo impulsar la tendencia hacia la monopolización y con ello hacia la acumulación de capital. La privatización de los servicios públicos y de las empresas nacionales de mayor tamaño, como también la concentración de los enclaves productivos más rentables por parte de contados conglomerados económicos, ha sido la tendencia de las últimas décadas, lo que ha supuesto un escenario favorable para

la acumulación. Esta realidad incluye las economías extractivas y la explotación de recursos naturales, tal como se muestra en el tercer capítulo de este libro.

No por una leve mejoría del sistema se puede decir que el desempeño de la economía haya retornado a condiciones de estabilidad y prosperidad. Por el contrario, la manifestación efectiva de la recesión en muchos países del hemisferio occidental (pobres y ricos), y las cada vez más crecientes tensiones socioeconómicas en Estados Unidos y Europa, han planteado un escenario de incertidumbre en el albor de la segunda década del siglo XXI. Desde algunas aristas de interpretación se trata de un derrumbe prolongado del sistema económico que difícilmente tiene reverso, por lo cual es posible suponer que la primera mitad del presente siglo puede traducirse en el fin del capitalismo moderno a expensas de una era todavía incierta.

Frente a los conflictos actuales, en los cuales millones de personas en varias latitudes del planeta han perdido el empleo, la vivienda, la seguridad social e incluso la propia vida, parece erguirse una pregunta: ¿han fracasado los planes de ajuste estructural? Posiblemente la respuesta sea que no, como tampoco ha fracasado el sistema capitalista de los últimos siglos. Más allá del discurso proclamado por los sabios del neoliberalismo o por la escuela económica clásica, la implantación de este modelo no responde a la búsqueda de la igualdad social o el bienestar generalizado. El problema de la equidad ha sido una referencia demagógica y su resolución se presenta como el resultado natural de un efectivo proceso de acumulación de capital. Es decir, que la búsqueda real de este cambio de modelo es el dinamismo económico por medio de un proceso constante de monopolización y crecimiento y sólo de manera secundaria se espera la generación de empleo y el aumento en las capacidades de consumo. La reducción de la pobreza no ha sido ni es el objetivo de la política económica que sostiene el capitalismo, y de lograrse, sería una consecuencia tangencial producto de la repartición de los excedentes que supone la propia acumulación, pero cuyos efectos serían temporales, debido a la inequidad propia al sistema.

Por lo tanto, las dinámicas contemporáneas, minadas por conflictos socioeconómicos de significativa relevancia, reflejan el peso que lleva consigo el salvavidas del capitalismo; peso que ha sido soportado en mayor medida por las naciones empobrecidas y más específicamente por las mujeres y la niñez, pues son estos sectores poblacionales (especialmente

de los países pobres) la fuerza de trabajo que recibe un menor pago por su trabajo.

Pero bien sea que se trate de un momento de expansión o de contracción económica dentro de los ciclos del capitalismo, los países pobres siempre asumen los mayores costos. Son epicentros de la fuerza de trabajo abaratada, los proveedores de materias primas, los que soportan gran parte del costo ambiental y los que pagan varias veces las deudas contraídas a razón de los altos intereses. Ya sea que se trate de las relaciones de producción a nivel global o de las relaciones interestatales, las naciones empobrecidas (del sur) han generado la plusvalía necesaria para dinamizar el enriquecimiento de los sectores poderosos de los países enriquecidos (del norte) e incluso, han aportado para garantizar las condiciones de bienestar del grueso de la población en esas sociedades.

En el caso de los momentos de expansión económica, como sucedió en la época de posguerra del siglo XX, las naciones lograron generar procesos relativamente autónomos de enclaves productivos, aún bajo la sombra del monopolio ubicado en los países centrales del sistema; lo que en ocasiones generó los suficientes excedentes para aumentar la capacidad de consumo de un amplio sector de la población. Sin embargo, una vez que la economía mundial capitalista alcanzó un momento de contracción, fue necesario que se rompieran las fronteras y se desconcentraran las actividades productivas.

La desconcentración busca generar riqueza aprovechando las condiciones que permiten aumentar la productividad y para ello se requieren medidas como las gestadas por los planes de ajuste. Es decir, que en el marco de un ciclo de contracción como el que ha sucedido en las últimas décadas, las grandes corporaciones ponderan sus costos y encuentran preferible disminuir los costos de producción, a la vez que aumentan los de transacción, con el propósito de generar tasas de ganancia favorables para la acumulación de capital. Entre tanto, los países centrales desarrollan actividades productivas de mayor rentabilidad e innovadoras (y por tanto monopólicas), como la industria de la informática y la biotecnología. Esta situación es la que explica la más reciente (pero nada novedosa) avanzada transnacional en los países pobres, cuyas figuras más dramáticas son las maquilas caracterizadas por condiciones pauperizadas y desreguladas de trabajo.

Como resulta evidente, las consecuencias del cambio de modelo no han resultado favorables para los países que han transformado sus condiciones macroeconómicas en función de los planes de reajuste estructural y menos aún si han abierto sus puertas a los enclaves productivos de las empresas transnacionales. La inserción de los modelos de economía de apertura dilató la tendencia en el aumento de la desigualdad. La brecha del ingreso promedio ha aumentado en términos globales desde comienzos del siglo XX. Lo mismo ha sucedido con la brecha entre países ricos y pobres. Las diferencias salariales constituyen uno de los elementos que han catalizado esta situación, incluso, en los países industrializados. Si bien naciones como Alemania, Italia o Francia mantuvieron políticas que salvaguardaron algunas condiciones laborales, en el caso de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda o el Reino Unido, países que generaron mayores condiciones de flexibilización laboral, el aumento de la desigualdad del ingreso fue significativo.

La desigualdad también aumentó de manera considerable en el ámbito territorial. La diferencia entre el ingreso de las poblaciones urbanas y las rurales es significativa y pone en evidencia un claro proceso de pauperización de las condiciones de vida de los campesinos sujetos a lógicas adversas dentro de su relación con el sistema económico mundial. En la actual estructura global la *desruralización* se ha convertido en una tendencia impulsada por dos hechos interconectados. El primero, la modernización del sistema agropecuario, ha expulsado a la población rural en un proceso de depreciación de la mano de obra campesina. El segundo, el proceso de relocalización industrial a nivel global, busca atraer fuerza de trabajo de los campos pues esta es peor remunerada y permite un mayor proceso de acumulación de capital dentro del proceso productivo.

Ahora bien, en el escenario urbano la situación de la desigualdad no presenta patrones más alentadores. Tomando como referencia algunos países con economías estables, resulta evidente que las diferencias del ingreso entre los sectores más ricos y más pobres se han agudizando en las ciudades latinoamericanas en el periodo que va desde el comienzo de la década de los ochenta y el comienzo del siglo XXI. Según la CEPAL, en Argentina, mientras el 10% más pobre de la población concentraba el 2,8% de la riqueza nacional en 1980, esta se había reducido al 2,3% en 1999. Entre tanto, el 10% de la población más rica aumento la concentración de la riqueza del 30,9% al 36,7% en los mismos años. En México la disminución

de la riqueza para el 10% más pobre fue de 3.2% a 2.8% y en Venezuela de 2.5% al 1.2% en el mismo periodo, mientras que el decil más rico aumento del 25.8% al 33.6% en México, y del 21.8% al 31.4% en Venezuela. En Brasil el aumento de la concentración de la riqueza del 10% más rico pasó del 41.8% al 45.7% en solo la última década del siglo XX.

Esta desigualdad entraña serios conflictos en el caso latinoamericano. En la mayoría de los países, la década de los ochenta supuso un aumento de la brecha en el ingreso que se explica, entre otras razones, por las disparidades del impacto de los ciclos económicos entre los grupos poblacionales. La denominada crisis de la deuda y las reformas subsiguientes afectaron dramáticamente a la población pobre, el sector más vulnerable ante los recortes del gasto público.

Es innegable que el desmonte de los modelos del Estado de Bienestar ha agudizado las condiciones de pobreza en diversos países. Lo dramático es que las medidas propuestas a cambio tampoco han sido afortunadas. Los objetivos alcanzados por los planes de ajuste y la apertura de la economía con respecto al crecimiento no han logrado tener un impacto positivo sobre la población. En otras palabras, mientras las crisis afectaron más dramáticamente a la población desposeída, el aumento del Producto Interno Bruto, que se ha convertido en el objetivo fundamental de las políticas económicas de los Estados, no se ha traducido en un bienestar generalizado. Por el contrario, el comportamiento del PIB refleja un aumento de la desigualdad socioeconómica al incrementar exclusivamente el ingreso real de los sectores más acaudalados. El resultado de ello es un aumento progresivo del conflicto socioeconómico al interior de sociedades ya empobrecidas dentro del sistema económico a nivel mundial.

En este contexto se realzan las disparidades producto de la desregularización y de la puesta en marcha de un modelo *mercado*centrico. Las diferencias sociales en la cualificación de la fuerza de trabajo, determinadas en gran medida por el acceso limitado a los sistemas de educación superior y por la orientación hacia la formación de capital humano en el marco de las relaciones económicas, se convierten en una variable de enorme importancia dentro del escenario contemporáneo de liberalización económica, sobre todo en términos de la distribución del ingreso.

En general, desde los años ochenta el *ingreso real* promedio en los países latinoamericanos se ha reducido notoriamente. Los casos de Venezuela, con una reducción del 40%, Argentina con el 30%, Brasil y Costa Rica con el 21% son emblemáticos. En México, el empleo informal se ha multiplicado por dos y en Perú el empleo formal urbano descendió del 60 al 11%. A ello debe sumarse el tránsito de sectores poblacionales que pasaron de la clase media a la pobreza. En Perú y Brasil estos sectores representaron el 5% de los nuevos pobres. En Argentina, el aumento de la desigualdad se acompañó de un claro aumento de la concentración de la riqueza. Si para 1984 el decil con más ingresos de la población tenía ingresos diez veces superiores al decil más bajo, para el final de la década esta diferencia era de 23 veces. Por su parte, en Brasil el coeficiente de Gini pasó de 0,58 en 1981 a 0,67 en 1989. Mientras la población pobre era cada vez mayor, el nuevo modelo económico favorecía a los sectores de las importaciones y a los empleados de las fuerzas armadas en el caso del sector legal. Entre tanto, actividades como el narcotráfico y la corrupción política permitieron acaudalar fortunas de enorme cuantía.

Según el propio Banco Mundial, el coeficiente de Gini ha tenido un aumento significativo en los últimos años, lo cual se traduce en una mayor concentración de la riqueza en pocas manos. Teniendo como referencia dicho coeficiente, América Latina tiene hoy un grado mayor de desigualdad que el resto del mundo. Comparado con Asia la desigualdad es diez veces mayor, 17,3 veces más que los países de la OCDE y 20,4 veces que los países europeos. Lo cierto es que, tal como lo ha mostrado la ONU en numerosas investigaciones, el peso de la pobreza y la desigualdad lo tienen que soportar con mayor fuerza la niñez y las mujeres. Si estos sectores poblacionales permitieron con su trabajo y explotación la acumulación de capital de las economías inmersas en la revolución industrial europea del siglo XIX, ahora son quienes soportan, con su trabajo, el peso que impone el pago de la deuda.

A estas alturas un resulta irrefutable: la situación de desigualdad ha empeorado a nivel mundial cuestionando por esa vía las bondades del sistema. Durante el fin del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, la consolidación del modelo neoliberal puso sobre la cuerda floja los postulados teóricos sobre la prosperidad derivada de los mercados desregularizados y evidenció la desigualdad inherente al sistema capitalista en su conjunto; independientemente del modelo económico imperante. El coeficiente de

Gini en todo el mundo se elevó a 0,67 y según las Naciones Unidas en su *Human Development Report*, hoy día 46 países pobres tienen menos recursos que los que poseían en 1990. Ahora los padecimientos por hambre se presentan en 25 países más que en ese mismo año y ello es consecuencia directa e indirecta de la numerosa pérdida de empleos estatales, de la calidad de los mismos en industrias locales y del debilitamiento de los mercados agrícolas nacionales.

Por su parte, la importancia cada vez menor que tiene el salario en la supervivencia de las unidades domésticas, ha reducido notoriamente el precio del trabajo asalariado y ha aumentado la importancia de la economía informal para millones de familias en la región de América Latina. Estos sectores poblacionales, que parecen marginados del sistema económico, son la expresión más clara de la pauperización constatable inducida por las relaciones del sistema económico. No son marginados, ellos surgen del seno mismo de las contradicciones socioeconómicas que mantienen formas de explotación e inequidad severas.

En suma, la generación de mayores garantías para la rentabilidad empresarial privada, las desigualdades crecientes producto de la relación capacitación/salario y las posibilidades restringidas del Estado como institución redistribuidora del ingreso, agudizan sustancialmente el problema de la desigualdad a escala global, y en particular, en Latinoamérica. El papel del Estado como garante del capitalismo se ha inclinado cada vez menos hacia la promoción de la paz social y ahora parece concentrarse en el acto represivo. En todo caso la actuación estatal e interestatal, es indispensable para el sostenimiento de la estructura económica.

No sobra llamar una vez más la atención sobre el carácter histórico de la desigualdad en el capitalismo. Si bien las actuales condiciones de la economía parecen demostrar que las directrices del modelo económico neoliberal han agudizado la divergencia del ingreso, ello no es un hecho atípico en la historia de este sistema económico. En su historia, las convergencias en el ingreso y la calidad de vida han sido reducidas, y de presentarse, estas tienden a ser generalmente en las sociedades más industrializadas y aun con relativo éxito. Son casos excepcionales aquellos donde se produce una convergencia del ingreso a nivel mundial, es decir, donde tiene lugar una reducción de la desigualdad socioeconómica del grueso de la población del planeta. La razón es simple: la desigualdad

parece ser terriblemente indispensable para el funcionamiento de un sistema basado en la acumulación particular de capital.

En la actualidad, el proceso de configuración de unas relaciones económicas globales caracterizadas por el derrumbamiento del sector público y la disparidad en el desarrollo de la actividad productiva más rentable, han generado una nueva masa de pobres en aquellos países donde los Planes de Ajuste han sido aplicados con mayor intensidad. Las áreas hiperdegradadas de las ciudades evidencian el escenario de la pobreza Latinoamericana contemporánea. Ellas contienen en su seno a las víctimas de un modelo económico global que desestabilizó las economías agrarias tradicionales, desplazando las carencias generalizadas del campo a ciudades atestadas de condiciones lamentables. La pobreza rural disminuyó relativamente en los últimos años no por el mejoramiento de las condiciones materiales de sus pobladores sino por la desaparición progresiva del sujeto campesino, el cual se ha desplazado constantemente debido a la extensión de los macroproyectos de la industria agrícola y de la extracción primaria. El caso de la minería y los agrocombustibles son dos ejemplos contundentes de estos dos procesos.

Los cambios del modelo también afectaron la concepción de las relaciones interestatales. Si para la primera postguerra el postulado era la generación de condiciones para proteger los Estados más débiles y generar relaciones dirigidas a producir un equilibrio en la competencia, desde la década de los setenta esta iniciativa se ha desmantelado a favor de la generación de reglas de juego únicas para todos los países a través de las cuales se procure la lógica del mercado como única base de la competencia desregularizada. Los Tratados de Libre Comercio, como punta de lanza de esta iniciativa, han logrado sus objetivos macroeconómicos: el crecimiento, el fomento a la inversión y la acumulación. Pero es justamente por esta razón por lo que resultan inmensamente desfavorables.

La inserción del modelo económico sustentado en la desregularización y la apertura económica ha dado como resultado una mutación en las relaciones de producción cuya consecuencia ha sido el desmejoramiento significativo de las condiciones de vida del grueso de la población en los países periféricos. Al tiempo, las dinámicas económicas muestran el crecimiento del Producto Interno Bruto, mayor inversión y mayor rentabilidad en muchos sectores. Parece existir entonces una clara contradicción entre los

derroteros de las políticas económicas hegemónicas y el bienestar de la mayor parte de la población mundial.

Para que tal orden criminal sea posible, ha sido necesario todo tipo de imposiciones y coerciones, desde mecanismos político-económicos como la presión surgida por la deuda, los tratados económicos o los acuerdos internacionales, hasta la configuración de estructuras de poder dispuestas a defender dicho orden, bien sea por medio de la amenaza militar o el dominio absoluto (directo e indirecto) de los gobiernos nacionales.

La puesta en marcha de los mecanismos de *ajuste estructural*, parece ser parte de todo ello. Los cambios de las directrices en la relación mercado-Estado no son un cambio en la estructura del sistema económico, son apenas ajustes indispensables para el funcionamiento del mismo. A diferencia de lo que se podría pensar desde una lectura desprevenida, los cambios presenciados de las últimas décadas no son en absoluto la apertura a una nueva era en la cual se consolidaría una única ideología y una hegemonía económica, política y militar incontestable. El fortalecimiento del mercado a cambio del desvanecimiento de la presencia del Estado en la actividad económica, no solo resulta ser un proceso previsible sino indispensable dentro del funcionamiento del sistema económico. Por tanto, las preocupaciones por la agudización de las condiciones de la pobreza, el desgaste ambiental y el aumento de la violencia estructural y coercitiva no se agotan en la reflexión sobre la pertinencia o no de aquellos planes de ajuste que fungieron como engranajes para la consolidación del neoliberalismo. Bien sea que se trate de modelos *estadocentricos* o *mercadocentricos*, el problema del desarrollo, la equidad y la sostenibilidad apuntan a las contradicciones de un sistema económico que requiere de inmensas desigualdades frente a la posesión o no de medios de producción, así como de un incesante crecimiento y de una acción orientada al ánimo de lucro. El capitalismo necesita llevar a cabo una acción depredadora con la mayoría de los seres humanos y con la propia naturaleza, lo que permite afirmar que la acción racional que lo sostiene queda en entredicho cuando se examinan los resultados de su aplicación. El llamado por la racionalidad parece promover una revisión de los paradigmas y trae al primer plano la inevitable pregunta sobre la sostenibilidad del sistema económico capitalista prevaleciente en los últimos cinco siglos.

Una mirada al presente futuro: ¿Es sostenible el sistema?

En la última parte de la primera década del siglo XXI, un hecho pareció afectar de manera alarmante a millones de personas en el planeta. La irrupción de una mortífera epidemia conocida como la *gripe porcina*, Influenza A o como el virus AH1N1, generó una especie de shock masivo amplificado por los medios masivos de comunicación en todo el mundo y avalado tanto por los organismos de salud transnacionales como por los gobiernos nacionales y locales. Como si fuese una situación apocalíptica, se anunciaba con preocupación la aparición de nuevos casos (confirmados o no) y de víctimas mortales de una enfermedad que surgía espontáneamente en las más diversas latitudes, aterrorizando a sus posibles nuevos contagios; es decir, a cualquier persona en el mundo, incluyendo a los portadores históricos de epidemias, los sectores más empobrecidos y a uno que otro presidente.

Los voceros internacionales y nacionales, expertos en el tema, alertaban a la población sobre el avance en las fases de la epidemia, avizorando un futuro con más víctimas. Se trataba de un fenómeno que parecía ser el más ilustre hijo de la globalización: no respetaba fronteras, etnias, clases sociales, rango de edad o sexo. La aparición de un nuevo caso, las alertas sobre las formas en que se expandía la enfermedad, e incluso el debate sobre los posibles “responsables” (un sujeto cualquiera que había conducido el virus de un país a otro) eran los temas que ocupaban los medios informativos, ilustrando así la expansión de una especie de paranoia generalizada.

Lo interesante es que esta situación no era una novedad. Ya en 2005 el gobierno estadounidense anunciaba que la denominada Gripe Aviar mataría a por lo menos dos millones de personas en tan solo ese país, mientras que la Organización Mundial del Comercio (OMC) calculaba, en ese mismo año, que las posibles víctimas por la enfermedad (conocida también como N5H1) ascenderían a más de siete millones antes del 2010. En realidad, durante este periodo murieron menos de 300 personas en el mundo por esta causa y ninguna de ellas en Estados Unidos. Pero la paranoia generada por los medios, los gobiernos y las organizaciones multilaterales fue suficiente para que 1200 millones de dólares fueran invertidos por el presupuesto público de Estados Unidos con el propósito de comprar medicamentos, específicamente el conocido antiviral Tamiflu,

a la farmacéutica Roche, asociada a la Gilead Sciences. No sobra decir que el secretario de defensa nacional del primer gobierno Bush, Donald Rumsfeld, había sido presidente del directorio de ésta última farmacéutica en la década de los noventa.

Esta coincidencia en la compra masiva de medicamentos a Roche volvió a surgir en los últimos años de la primera década del siglo XXI, ahora bajo el peligro del AH1N1, un virus para el cual la OMC recomendó el Tamiflu como medicamento preventivo. La reciente epidemia ha generado la lamentable muerte de algunos cientos en todo el mundo, pero la paranoia generada no tiene justificación alguna si se compara con el medio millón de personas que mueren anualmente, según la OMC, por causa de la gripe común. Tampoco es justificable frente a los dos millones de muertes anuales por malaria, a los dos millones de muertes anuales por diarrea y menos aún frente a los diez millones de muertes anuales a causa de de sarampión o la neumonía, todas ellas enfermedades prevenibles. Entonces la alarma por la salud global de los últimos años parece ser más el producto de la planeación económica que el fruto del altruismo y la preocupación real por la salud del mundo entero.

Este ejemplo, en el cual el fundamento de la paranoia mundial está guiado por el ánimo de lucro de las compañías farmacéuticas transnacionales, se suma a toda suerte de situaciones que ponen en cuestión las lógicas sobre las cuales la razón instrumental ha servido como pilar del orden actual del mundo. Si los conflictos bélicos del siglo XX evidenciaron lo aterrador que puede ser el *avance científico* con ejemplos tan dramáticos como la Bomba H, hoy día los corolarios de la racionalidad económica evidencian la descomposición de un sistema que diariamente genera toda suerte de desmanes y tragedias a lo largo y ancho del planeta.

Sin duda, el desarrollo racional que ha acompañado a la modernidad en los últimos siglos ha permitido el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo técnico e incluso del arte y la cultura a niveles admirables. Que la ciencia y la técnica hayan podido edificar mejoras significativas en cuanto salubridad, alimentación, higiene, abrigo, comunicación e incluso recreación, son logros que no se pueden desconocer. No obstante, la realidad actual revela que la acumulación de conocimiento no ha estado dirigida a la ciencia *per se*, ni mucho menos a la intención filantrópica de mejorar las condiciones de la humanidad o del planeta; más bien ha

estado sujeta a la racionalidad económica del capitalismo y sus objetivos de productividad y crecimiento incesante, lo que ha dejado consecuencias que han convertido a la realidad mundial en un recipiente inconmensurable de fracasos, injusticias y desgracias.

La ciencia y la técnica modernas, impulsadas por las lógicas bélicas y la acumulación de capital, nos han situado en un estadio donde el equilibrio parece ser un concepto inalcanzable. En la actualidad, la población que compone el 10% más pobre del mundo soporta un infierno en vida por cuenta de las carencias de elementos tan elementales como el acceso al agua potable, alimentación adecuada, vivienda y servicios de educación, salud o recreación. Al tiempo, el 10% más rico del planeta acoge estilos de vida y pautas de consumo que se caracterizan por el derroche y la ostentación.

Esta situación de desproporción parece escapar a toda razón. ¿Cómo se puede pensar que es sostenible un sistema político y económico mundial, en el cual resulta normal que el gasto anual de perfumes, tan solo en Europa y Estados Unidos, supere con creces la inversión total necesaria para dotar de agua potable a toda la población del mundo, o que los gastos militares de países como Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido o Rusia sean mayores que el presupuesto para cumplir con las metas del milenio³ planteadas por la ONU?

Interesantes datos comparativos permiten develar esta realidad devastadora. Las fortunas de las 300 personas más acaudaladas bastarían para erradicar la pobreza extrema. Más grave aún, el monto de lo que se gasta en alimentación para animales domésticos en Estados Unidos es mayor que lo que se necesitaría para suplir los gastos de salud y alimentación básicas de quienes carecen de ellas en todo el mundo. Así, mientras exista una realidad, como afirma la FAO, en donde hay 26.000 personas (niños y niñas especialmente) que mueren todos los días como consecuencia del hambre y la pobreza, y mientras existan 4,000 millones personas que viven en condiciones pobreza y extrema pobreza (actualmente más de mil millones de personas a nivel mundial padecen de hambre y la misma cifra aplica para quienes carecen todavía de acceso seguro a fuentes de agua

³ Metas de por sí austeras en comparación con lo que el desarrollo económico y técnico pudiese permitir.

potable), será inevitable cuestionar duramente la sostenibilidad de este sistema mundial. No se trata entonces de preguntarnos por el mundo del mañana, el de las futuras generaciones. El problema de la sostenibilidad debe ir mucho más allá de las condiciones ambientales y de un futuro en todo caso incierto. Deberíamos preguntarnos si el mundo de hoy, el sistema económico imperante hoy es sostenible, si es éticamente sostenible.

En la actualidad, la revisión exhaustiva de las condiciones de vida de la humanidad en su conjunto, así como el examen de las posibilidades que tienen los hombres para alcanzar la libertad, el bienestar, la felicidad y la vida misma, reflejan un panorama poco halagador. El sometimiento, la violencia, el hambre y la miseria de muchos, aparecen por todas partes, llamando la atención sobre la necesidad de cuestionar el funcionamiento del sistema económico y político global. El mundo de la razón y la ética no pueden sucumbir a los parámetros de la racionalidad técnica e instrumental y menos a sus obtusos objetivos de acumulación incesante. Si las instituciones que conducen el mundo, así como las disciplinas y las ciencias humanas, sociales y económicas desconocen el camino adecuado para defender lo humano y la vida, será preciso cuestionarlas, atacarlas y reconstruirlas.

BIBLIOGRAFÍA

- Alvares Leguizamón, Sonia (comp.). *Trabajo y producción de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe. Estructuras, discusiones y actores*. Buenos Aires: Colección CLACSO-CROP, 2005.
- Casilda Béjar, Ramón. *América Latina y el Consenso de Washington*. Boletín Económico De ICE N° 2803 (versión digital)
- Cimadamore, Alberto; Cattani, Antonio David (coord.). *Producción de pobreza y desigualdad en América Latina*. Colecciones CLACSO. Buenos Aires: Siglo Del Hombre Editores, 2008.
- Davis, Mike. *Planeta de ciudades miseria*. Madrid: Foca Ediciones, 2006.
- Fay, Marianne. *The urban poor in Latin America*. Washington: World Bank, Direccions in Development, 2005.
- Houtart, François. *Deslegitimar el capitalismo. Reconstruir la esperanza*. Buenos Aires: Casa Editorial Ruth, 2008.
- ONU. Datos básicos: las caras de la pobreza. Proyecto del Milenio. www.unmillenniumproject.org
- Wallerstein, Immanuel. *La crisis estructural del capitalismo*. Bogotá: Ediciones Desde Abajo, 2007.